



La lectura y el libro

Descripción

La Administración del Estado está compuesta por un conjunto de organizaciones pertenecientes a los niveles central, autonómico y local, dirigidas por políticos y gestionadas por funcionarios. Los políticos dirigentes se renuevan periódicamente como resultado de las correspondientes elecciones, dando paso no solamente a otras personas sino también a otras ideas o «estilos» de gobernar cuando cambia el partido vencedor, mientras que los funcionarios suelen permanecer en sus puestos o en otros análogos dentro de la administración a la que pertenecen. Afortunadamente los políticos de nuestra democracia van madurando en su talante hacia los funcionarios que encuentran en los despachos; ya no los consideran necesariamente enemigos peligrosos por el hecho de haber trabajado con el gobierno anterior—¡qué remedio, si de lo que viven es de trabajar para el gobierno de turno!— y van renunciando poco a poco a su terrible prerrogativa de cesar a todos los legalmente cesables, aunque aún pese demasiado el afán de atender a compromisos varios para cubrir puestos a menudo difíciles y en los que la experiencia constituye un valor decisivo.

El político y el funcionario profesional, si entienden bien sus roles respectivos, pueden formar una feliz asociación, una eficaz simbiosis, dado que a ambos les une el común interés de optimizar la gestión pública. Los políticos, porque de su buena gestión —aunque por desgracia no sólo de ella— depende el que ganen las siguientes elecciones y, por tanto, el permanecer en el poder, lo que, como sabemos, es el único objetivo verdadero de todo político. (Sin el poder, las mejores ideas e intenciones son inútiles). Los funcionarios, porque su profesión es precisamente la gestión pública, en la que, como haría cualquier otro profesional, tratan de alcanzar la excelencia, al menos en la medida en que el deficiente sistema de remuneraciones, incentivos y carrera lo permiten.

Por otra parte, el funcionario profesional suele ser persona obediente y disciplinada. Su sino es trabajar para políticos de uno y otro signo, vengan los que vengan; la obediencia y la disciplina son valores arraigados y generadores de un automatismo en el cumplimiento de las órdenes recibidas que a veces llega a sorprender a los políticos recién llegados y no familiarizados con la Administración. El funcionamiento de la cadena de mando políticos-funcionarios queda garantizado, salvo las inevitables excepciones, desde el inicio de las legislaturas por la idiosincrasia misma de las respectivas profesiones, especialmente en las administraciones con más solera, como la central, con más de trescientos años de funcionamiento a sus espaldas.

Pero en lo que de ningún modo pueden coincidir ni entenderse funcionarios y políticos es en la funesta obsesión de muchos de estos últimos por descalificar la gestión del gobierno anterior sea como sea. Los funcionarios asisten perplejos cada cuatro años —no se acostumbran— a declaraciones «políticas» del nuevo gobierno que echan por tierra todo su concienzudo trabajo,

realizado «con lealtad al Rey, respeto a la Constitución» y ante todo, con un sentido del Estado, y de la necesaria continuidad de su acción en el tiempo del que, desgraciadamente, muchos políticos bisoños, o no tan bisoños, parecen carecer por completo. Hemos llegado a ver cómo tales descalificaciones se justificaban, simplemente, por el hecho de que el gobierno anterior —ese, por principio, pésimo gestor— «había perdido las elecciones» y, claro, nosotros no vamos a hacer lo mismo que los perdedores.

Paulatinamente, sin embargo, el sentido del Estado y, por tanto, el entendimiento de la política no como una pelea fratricida sino como una carrera de relevos en la que cada gobierno toma el testigo y avanza un trecho sobre lo que dejó el anterior, van conquistando algunas pequeñas parcelas de la gestión pública, quizá aquellas donde equipos duraderos de funcionarios, en buena sintonía con el sector privado y los agentes sociales implicados en esa área de la Administración, han conseguido desarrollar las líneas maestras de una política de Estado que sobreviva a los tormentosos y a veces absurdos avatares de una democracia aún joven, a la que todavía, como dicen en mi pueblo, «le falta un otoño».

En las últimas legislaturas, la política para el libro y la lectura se ha ido conformando como una de esas áreas en las que la continuidad de la acción de los distintos equipos de gobierno parece ser mayor que en otras. El que los actuales responsables de esta política hayan tenido palabras de elogio y reconocimiento para la gestión anterior constituye, no sólo un detalle de lo que ya va siendo rara elegancia española, sino una verdadera excepción en los usos generales de nuestra política.

Políticos y funcionarios responsables del área han entendido bien y de una forma bastante homogénea a lo largo de los años que el fomento de la industria del libro y el de la lectura constituyen cuestiones de interés general, que la lectura es la base principal del desarrollo cultural y que una buena oferta de libros, abundante, diversificada y accesible al ciudadano a través de una buena red de librerías y bibliotecas es imprescindible para la extensión del hábito lector. Los responsables públicos han tratado, con resultados razonablemente positivos, de aglutinar, por una parte, una política que debe ser sin duda de todos, una verdadera política de Estado, y, por otra, los esfuerzos empresariales de un sector del libro que, sin perjuicio de que, como en toda actividad económica, cifre en el beneficio su objetivo principal, demuestra en muchas ocasiones que el amor al libro y la vocación cultural cuentan también entre sus motivaciones.

En algunas ocasiones, el gobierno y los funcionarios han debido capear situaciones en las que las pretensiones empresariales de obtener mayores ingresos procedentes de los caudales públicos o más acciones públicas que favoreciesen la venta de libros se han unido a planteamientos políticos, manifestados tanto por la oposición de turno como por algunos empresarios actuando fuera de su papel natural, que harían hincapié en la pretendidamente mala situación del libro y de la lectura en España o en la insuficiencia de las acciones públicas para mejorar dicha situación.

El habitual buen clima de sintonía y colaboración entre sector público y privado en torno al libro se ha visto aderezado con pequeñas escaramuzas que a menudo tenían más alcance mediático —que en definitiva era lo que se pretendía— que verdadera enjundia dialéctica. Con los años de convivencia y trabajo en común, unos y otros hemos acabado sonriendo al hablar de cosas en las que en el fondo nos entendíamos aunque cada uno tuviera que hacer el papel que le correspondía y defender los intereses que les eran propios, los públicos en el caso del gobierno y los privados en el caso del sector.

Esta dialéctica de alcance, como digo, fundamentalmente mediático, ha conseguido sin embargo deslizar en la opinión pública algunas interesadas inexactitudes que conviene repasar brevemente antes de que construyamos entre todos una equivocada mitología del libro y la lectura en España. Algunos de estos mitos, y sus correspondientes desmitificaciones, podrían ser los siguientes:

a) En España apenas se lee. Estamos a la cola de Europa en lectura.

En España, en lectura, estamos como en la mayoría de las cosas, es decir, en una posición intermedia entre los países más avanzados y los menos avanzados. En el último estudio comparativo de la Unión Europea, se situaban cerca de la media de la Europa a quince, separados sólo por décimas de punto, Alemania, Francia y España. Muy por encima de la media, el Reino Unido y los países nórdicos, y bastante por debajo, Bélgica y los países del sur de Europa, salvo España. Si nos apuran, podemos incluso afirmar que estamos mejor en lectura que en otras cosas, ya que Francia y Alemania cuentan con una *renta per capita* un 30 % superior a la de España, mientras que en lectura andamos por el estilo.

Nadie discute la necesidad de una política activa, constante y bien dotada para el fomento de la lectura, pero no hace falta para argumentar en su favor pintar un panorama catastrofista que no se corresponde con la realidad.

b) En España se publican demasiados libros para lo poco que se lee.

El error de comparar los millones de volúmenes (magnitud absoluta) que salen a la calle cada año con el porcentaje de españoles que leen (magnitud relativa) atenta contra la más elemental sensibilidad matemática. Si, por el contrario, dividimos la cifra absoluta de ejemplares publicados por el número absoluto de lectores, nos encontraremos, atendiendo a las estadísticas nacionales de los dos países, que España y Francia, país con el que con tanta frecuencia nos comparamos, registran exactamente la misma proporción de volúmenes publicados por habitante lector.

Por otra parte, ¿qué sentido económico tendría publicar mucho si casi nadie lee? España es, con más de doscientos cincuenta millones de volúmenes publicados al año, una de las primeras potencias editoras de Europa, al tiempo que, con más de veinte millones de lectores, es una de las principales potencias lectoras por la sencilla razón de que es uno de los países europeos con mayor población.

c) Las bibliotecas españolas son las peores de Europa

Las bibliotecas españolas responden al patrón de cultura bibliotecaria de los países del sur, región de Europa a la que España, guste o no, pertenece y no, obviamente, al de los países nórdicos, cuya cultura bibliotecaria —climatología incluida— data de 1800 y están a la cabeza del mundo en la materia. Sin embargo, el esfuerzo español ha permitido multiplicar por dos y por tres todas las magnitudes de medición en materia de bibliotecas en poco más de dos décadas —apenas existía cultura bibliotecaria antes de la transición democrática— y el ritmo de crecimiento de estas magnitudes sí es comparable con el de los países nórdicos. Simplemente estamos recuperando a marchas forzadas un retraso de dos siglos. Estamos empezando, como quien dice, y ya se pretende

que seamos como los nórdicos en todo, incluso en lo del derecho de préstamo. Por cierto, si fuéramos un país como ellos tendríamos tres o cuatro millones de lectores, y no los veinte que tenemos.

d) Las librerías están amenazadas y pueden desaparecer.

Las librerías son parte fundamental en la cadena del libro y lo seguirán siendo. Otra cosa distinta es que, como en todo negocio, deban mantener un constante proceso de adaptación a las nuevas circunstancias. Profesionalización, especialización o adecuación de la dimensión son algunas de las líneas en las que este subsector está trabajando activamente y para lo que cuenta con el pleno apoyo de la Administración, que entiende la necesidad de preservar, desde el punto de vista cultural, una sólida red de librerías. El servicio que el librero proporciona al lector no es fácilmente sustituible, como lo demuestran las dificultades que encuentran para la conquista de una mayor cuota de mercado las fórmulas de venta de libros «sin librero».

e) El Estado no realiza el suficiente esfuerzo inversor en materia de libro y lectura.

El presupuesto de subvenciones al sector del libro supera cada año su máximo histórico, pese al contexto económico de contención del gasto y limitación de todo tipo de subvenciones. De hecho, es un sector excepcionalmente bien tratado, al contar no sólo con el apoyo del Ministerio de Cultura, sino también con el de la Secretaría de Estado de Comercio para sus actividades de promoción exterior. El presupuesto anual del Plan de Fomento de la Lectura es muy superior al de otros países europeos, incluido el Reino Unido, que en su momento constituyó un modelo a seguir.

Por otra parte, reclamar esfuerzo inversor al Estado no debe confundirse con exigírselo necesariamente a la Administración central. La mayoría de las competencias culturales están transferidas a comunidades autónomas y corporaciones locales, como, por ejemplo, las que se refieren a la dotación de libros para las bibliotecas públicas, que constituye una de las principales limitaciones actuales del sistema de lectura pública.

f) El sector del libro está altamente implantado en el exterior.

Es cierto que Iberoamérica y los países de habla hispana constituyen un mercado principal para nuestros libros, como prolongación natural del mercado español, y que el esfuerzo del sector en esa área, es ingente y constante, con pleno apoyo de los poderes públicos; Pero también debe tenerse en cuenta que la presencia de la edición española en los mercados de países no hispanohablantes —la que sería una verdadera internacionalización desde el punto de vista lingüístico— es aún muy pequeña. En un contexto global, sin embargo, grandes grupos editoriales de países no hispanohablantes —Alemania y Francia, principalmente— han tomado posiciones muy relevantes en el mercado español, que hacen patente la necesidad de que el sector compita, como hacen estos grupos extranjeros, en todo el mundo, y no sólo en su área idiomática. No hay ninguna norma que reserve el mercado en español a las editoriales españolas.

Realizadas las anteriores aclaraciones, que nos ayudarán a situarnos en la realidad del libro y la lectura en nuestro país, podemos recordar algunas de las líneas principales de esa política de Estado que parece irse consolidando a través de los años.

En primer lugar, conviene destacar el papel crucial que el diálogo permanente y el buen entendimiento entre las partes han jugado, y deben seguir jugando en la articulación de las acciones públicas y privadas de fomento. Salvo incidentes transitorios y que se acaban superando, este buen ambiente se ha mantenido y resulta una condición básica para la eficacia en las acciones de colaboración.

Resulta necesario mantener el apoyo público, tanto en lo económico como en lo que se refiere a la

presencia institucional, a las estructuras asociativas de los diferentes subsectores: editores, distribuidores, libreros, principalmente, para asegurar, entre otras cosas, el seguir disponiendo de interlocutores válidos y representativos.

Dentro del apoyo a la oferta de libros y revistas, debe destacarse la importancia de las ayudas a la edición para contribuir a conseguir unos mínimos niveles de diversidad en el acervo bibliográfico español. A menudo se olvida que, aunque en España se lee bastante, la proporción de novelas sobre el total de libros leídos es abrumadora, y que los géneros y títulos de menos potencialidad comercial son también necesarios para el desarrollo cultural.

Por el lado de la demanda, es decir, de la lectura, parece indudable que el clima favorable generado en la sociedad por la primera fase del Plan de Fomento de la Lectura (2000-2004) debe mantenerse y explotarse mediante fases sucesivas, para lo que los nuevos responsables del área ya han mostrado su buena disposición. El sector educativo y las bibliotecas públicas son los terrenos de *juego estratégicamente* más relevantes de esta política y sin una acción decidida en ambos frentes de poco servirán las acciones de comunicación y animación, que constituyen, sin embargo, un complemento necesario y eficaz. Debemos confiar en que se imponga el buen sentido en la cuestión del derecho de préstamo en las bibliotecas y que un mal entendimiento del momento histórico no vaya a lastrar el incipiente desarrollo de nuestro aún débil sistema de lectura pública. El cielo puede esperar.

Finalmente, en un mundo crecientemente globalizado, el esfuerzo de internacionalización del libro español debe mantenerse y acrecentarse, especialmente en los mercados de habla no española: Brasil, Estados Unidos y Europa, principalmente, sin olvidarnos de las colosales sociedades lectoras de Asia. Otros lo hacen, y los responsables públicos y privados del libro en español —la segunda lengua de comunicación a nivel mundial— no pueden ignorar el reto de difundir nuestros libros en el resto de las áreas idiomáticas, para lo que tanto las traducciones a otras lenguas —que cuentan con un apoyo oficial insuficientemente utilizado o— como la expansión internacional del español y, con el idioma, de los libros en español, constituyen, sin duda, dos pilares fundamentales.

Fecha de creación

29/07/2004

Autor

Fernando Lanzas